

0063/2025

Se ha recibido su solicitud de informe a este Servicio Jurídico con el número de referencia arriba citado, en relación con el borrador de Memorando de Entendimiento entre la Autoridad Reguladora de Gibraltar y la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) del Reino de España sobre colaboración en materia de privacidad y protección de datos personales.

I

Con carácter previo, hemos de señalar que este Servicio Jurídico ya ha tenido ocasión de examinar instrumentos similares presentados a informe respecto de instituciones miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (en adelante RIPD), cuyo resultado fueron, entre otros, los informes SG 26/2019, SG 39/2019 y SG 03/2021. En esta ocasión, con carácter previo y como más adelante se analizará llama la atención la naturaleza jurídica no solo de uno de los firmantes al no tratarse directamente del Reino de España, sino de la autoridad de control en materia de protección de datos de una Comunidad Autónoma, como ocurría en nuestro informe de septiembre de 2025 al que más adelante nos referiremos, sino de los dos firmantes, al ser la contraparte de la citada Autoridad Catalana de Protección de Datos la Autoridad Reguladora de Gibraltar.

Señalado lo cual, al igual que se hizo en anteriores informes comenzamos con el estudio en primer lugar de la naturaleza jurídica del presente borrador de MOU. A tal fin, como acabamos de anticipar, conviene detenerse en el examen de las partes firmantes del mismo. Por un lado, se aprecia la existencia de un elemento de derecho internacional, como es la presencia, en este caso, de la Autoridad Reguladora de Gibraltar (en adelante GRA), a la cual se refieren las declaraciones iniciales del borrador de este MOU indicando que la GRA está establecida como Comisionado de Información de Gibraltar y que funciona como regulador independiente para defender los derechos de información en interés público y promover la transparencia de los organismos públicos y la privacidad de los datos de las personas. Asimismo, se indica que la GRA está facultada para tomar una serie de acciones reguladoras por incumplimiento, entre otras cosas, de la siguiente legislación (que también se indica que se puede modificar periódicamente): DPA de Gibraltar, RDPD de Gibraltar, Reglamento de Protección de Datos de 2006, etc.

Por el otro lado, la Autoridad Catalana de Protección de Datos apoya su competencia en el artículo 56 de la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, 3/2018, de 5 de diciembre, en cuya virtud (el subrayado es nuestro):

“1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos.

Asimismo a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales”.

En línea con ello, el artículo 53 de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, el cual se cita en el texto del MOU que ahora se informa como base para su celebración, regula dentro de la celebración de acuerdos internacionales administrativos y no normativos por las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades locales, lo siguiente en relación con la celebración de estos últimos:

“1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos internacionales no normativos en las materias que sean propias de su competencia. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia podrán celebrarlos las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales.

2. La tramitación interna y registro de estos acuerdos internacionales no normativos, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 3 siguiente, se regirán por lo previsto en el título IV de la presente Ley.

3. Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez días”.

Corresponde pues a la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pronunciarse antes de su firma acerca de su naturaleza y su procedimiento. Este Servicio Jurídico desconoce los términos de dicho informe, si bien considera indispensable la remisión del mismo a efectos de clarificar las

competencias tanto de la Autoridad Catalana en materia de Protección de Datos como de la citada Autoridad Reguladora de Gibraltar para la suscripción de este tipo de acuerdos internacionales no normativos habida cuenta de la consideración de Gibraltar como un territorio británico de ultramar, con el cual España mantiene relaciones históricas. Y en especial, teniendo en cuenta que cualquier acuerdo que implique intercambio de datos personales, incluso si fuera para meros fines administrativos podría interpretarse como un acto de política exterior, ya que podría ser susceptible de implicar transferencia de información entre jurisdicciones diferentes. A la vista del alcance y contenido de este borrador se advierte la indispensable necesidad de concretar tal aspecto.

En esta misma línea, conviene traer a colación la Declaración¹ contenida en una Nota verbal de la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa, con fecha 21 de abril de 2022, registrada en la Secretaría General el 28 de abril de 2022 –respecto a la comunicación que el Reino Unido dirigió a la Secretaría General del Consejo de Europa el 29 de julio de 2019, relativa a la intención del Reino Unido de extender a Gibraltar la aplicación del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automático de Datos de Carácter Personal (CETS n.º 108), y cuyo aviso fue recibido mediante carta del Secretario General con fecha 12 de julio de 2019, España, recordando que es Parte en dicho Convenio, así como en el Protocolo Adicional (CETS n.º 181) y en el Protocolo de enmienda (CETS n.º 223) del mismo, deseando recordar el contenido de su Declaración de 5 de marzo de 2008 y realizar la siguiente declaración (texto traducido del inglés al español a los exclusivos fines de este informe, el subrayado es nuestro):

- Gibraltar es un territorio no autónomo cuyas relaciones internacionales son responsabilidad del Reino Unido y que está sujeto a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

- Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen exclusivamente competencias internas, que se originan y se basan en una distribución y atribución de competencias realizada por el Reino Unido de conformidad con su legislación interna, en su calidad de Estado soberano del que depende el mencionado territorio no autónomo.

- Como resultado, cualquier participación de las autoridades gibraltareñas en la implementación del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automático de Datos de Carácter Personal se entenderá como realizada

¹ [Full list - Treaty Office](#)

exclusivamente dentro de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que modifica de ninguna manera lo establecido en los dos párrafos anteriores.

- El procedimiento previsto en los Arreglos relativos a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos tratados internacionales adoptados por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007 (así como los Arreglos Acordados relativos a las autoridades de Gibraltar en el contexto de instrumentos y tratados de la UE y de la CE, fechados el 19 de abril de 2000), se aplican a esta Convención y a sus Protocolos.

- La aplicación a Gibraltar de esta Convención y de sus Protocolos no debe interpretarse como un reconocimiento de ningún derecho o situación respecto a áreas no cubiertas por el Artículo X del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713, concluido entre las Coronas de España y del Reino Unido.

Asimismo, con fecha de 11 de junio de 2025 se hizo pública la Declaración conjunta por representantes de la Unión Europea, España, el Reino Unido y Gibraltar constituyendo un acuerdo político definitivo sobre los aspectos fundamentales del futuro Tratado que regula la relación entre el Peñón y la UE tras el Brexit.

Sentado lo anterior, la primera consideración que debemos hacer es la relativa a la **necesaria clarificación acerca de las competencias de los firmantes para la suscripción de estos acuerdos dentro del marco de la política exterior española, siendo legalmente necesario para ello la emisión del correspondiente informe de la citada Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de conformidad con el artículo 53 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre.**

II

Sin perjuicio de lo anterior, en relación con el contenido de este borrador hemos de traer a colación jurídica el informe emitido por este mismo Servicio Jurídico en el mes de septiembre de este mismo año a propósito de la consulta formulada en relación con el Memorandum de Entendimiento entre la Autoridad Nacional de Protección de Datos de la República Federativa de Brasil y la Autoridad Catalana de Protección de Datos del Reino de España sobre colaboración en materia de

privacidad y protección de datos personales. En dicho informe se establecía lo siguiente:

“(…) Una vez determinado que el presente borrador de Memorando puede ser calificado como un Acuerdo internacional no normativo (AINN), en el sentido de la ley 25/2014, el título V de esta ley establece la necesidad de que los proyectos de acuerdos internacionales no normativos sean informados por el servicio jurídico respectivo del organismo público que los celebre, y dicho Informe deberá tener el contenido, al menos, establecido en el artículo 45 de la ley 25/2014. Dicho precepto dice así: Artículo 45. “Informe. Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán informados por el Servicio Jurídico respectivo del órgano u organismo público que los celebre acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional, en particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Asimismo, informará sobre la competencia para celebrarlo y sobre su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias”.

En el expediente relativo a acuerdos no normativos que impliquen obligaciones financieras se acreditará la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos mediante informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

Como se ha desarrollado hasta ahora, quien suscribe considera que nos encontramos ante un acuerdo internacional no normativo por encajar en la definición prevista en el artículo 2, letra c), de la ley 25/2014, sin que por lo tanto se considere que deba tramitarse como un tratado internacional o como un acuerdo internacional administrativo; en el primero de los casos, al menos, porque no se pretende que tenga dicho Instrumento efectos jurídicos vinculantes, y respecto de la consideración del borrador de Memorando como un acuerdo internacional administrativo, no existe tampoco un tratado previo que prevea la necesidad de un acuerdo internacional administrativo que desarrolle aquél. Por lo que hace al procedimiento, en la tramitación interna, el art. 46.1 de la ley 25/2014 no requiere la tramitación prevista en el Título II de dicha ley, estableciéndose que los signatarios tienen autonomía para decidir el procedimiento. En lo que hace a la competencia para celebrar este tipo de acuerdos internacionales no normativos, el art. 44 de la ley 25/2014 permite que estos acuerdos sean celebrados por el Gobierno, los departamentos ministeriales, los órganos, organismos y entes de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades Públicas y cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia para ello. Respecto de la competencia específica de la Autoridad Catalana en materia de protección de datos el art. 56.1 LOPDGDD, que lleva por título “Acción exterior” establece que (el subrayado es nuestro): “Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos.

Asimismo a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales".

Asimismo, es de destacar el artículo 57 RGPD, el cual establece que entre las funciones de las autoridades de control se incluye la de controlar la aplicación del propio Reglamento y hacerlo aplicar, promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento de los datos personales; promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben; cooperar, en particular compartiendo información, con otras autoridades de control y prestar asistencia mutua con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del Reglamento; hacer un seguimiento de cambios que sean de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las prácticas comerciales; así como desempeñar cualquier otra función relacionada con la protección de los datos personales.

El art. 56.1 LOPDGDD establece que corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Si bien la necesidad de una autoridad pública independiente en esta materia es un requisito establecido por el Derecho de la UE, como el art. 16 del TFUE (versión consolidada, DOUE 7 de julio de 2016), o el RGPD (art. 51.1), y desarrollada esta materia por la LOPDGDD, como hemos visto. La STC 290/2000, de 30 de noviembre (FJ 8º y 9º), ya tuvo ocasión de examinar la peculiar naturaleza de la AEPD: "En efecto, al dar cumplimiento al mandato contenido en el art. 18.4 CE, el legislador, sin excluir en modo alguno el recurso último a los órganos jurisdiccionales para la tutela de los derechos individuales, como se determina en los apartados 2 a 5 del art. 17 LORTAD, no ha querido sin embargo que la protección de datos personales frente al uso de la informática se lleve a cabo exclusivamente en la vía judicial, esto es, cuando ya se ha producido una lesión del derecho fundamental. Por el contrario, ha querido que dicha protección se lleve a cabo mediante el ejercicio por la Agencia de Protección de Datos, con carácter básicamente preventivo, de las funciones de control de los ficheros tanto de titularidad pública como privada que la LORTAD le atribuye y, en su caso, a través de las reclamaciones de los afectados ante la Agencia de Protección

de Datos (art. 17.1), las que provocarán la posterior actuación de este órgano. Por lo que cabe estimar que existe una correspondencia entre las funciones y potestades que la LORTAD ha atribuido a la Agencia de Protección de Datos y el carácter preventivo de sus actuaciones. Pues es este carácter tuitivo o preventivo el que, en última instancia, justifica la atribución de tales funciones y potestades a la Agencia de Protección de Datos para asegurar, mediante su ejercicio, que serán respetados tanto los límites al uso de la informática como la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos personales en relación con todos los ficheros, ya sea de titularidad pública o privada”.

Dado que el propio artículo 56.1 establece que las Comunidades Autónomas a través de las autoridades autonómicas de protección de datos ejercitaran las funciones como sujetas de acción en el exterior dentro del marco de sus competencias, cabe concluir que de conformidad con el artículo 56.1 Ley Orgánica 3/2028 la Autoridad Catalana de Protección de Datos tiene capacidad para firmar un acuerdo internacional no normativo siempre que lo haga dentro del ámbito de sus competencias, por ser este el límite que dispone la propia ley que le habilita para hacerlo.

III

En cuanto a la adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, teniendo en cuenta la condición de ser una autoridad autonómica de control uno de los firmantes de este MOU, resulta indispensable extremar el respeto a distribución de competencias prevista en esta materia. A este respecto, por un lado el ámbito de competencias propio de las autoridades autonómicas de protección de datos se establece en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre:

“1. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a:

a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta.

b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local.

c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.

2. Las autoridades autonómicas de protección de datos podrán dictar, en relación con los tratamientos sometidos a su competencia, circulares con el alcance y los efectos establecidos para la Agencia Española de Protección de Datos en el artículo 55 de esta ley orgánica”.

Por otro lado, dada la conexión de este MOU con el uso de la tecnología de inteligencia artificial tal y como expresa la Memoria Justificativa obrante en este expediente: “La APDCAT, en el marco de la Red de Delegados de Protección de Datos (DPD en Xarxa), y en colaboración con el profesor y experto Alessandro Mantelero, ha elaborado un modelo para la evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales en el uso de inteligencia artificial, denominado modelo FRIA catalán. Es una metodología pionera en Europa que se articula en torno a un modelo teórico pero acompañado de su aplicación a varios casos de uso”, resulta esencial asegurar y garantizar que su alcance quedará comprendido dentro de su ámbito competencial también dentro de esta materia. En este sentido, corresponde a la propia Autoridad Catalana de Protección de Datos a través de su Servicio Jurídico justificar que este MOU se realiza dentro del estricto ámbito competencial que le corresponde en esta materia de conformidad con el ut supra transcrito artículo 45 de la Ley 25/2014, el cual no consta en la documentación recibida.

Sin perjuicio de lo anterior, partiendo de la consideración de un sistema de IA como un conjunto de algoritmos y tecnologías que simulan el comportamiento humano, como el pensamiento, el aprendizaje, y la toma de decisiones, el primer apunte que corresponde hacer es el relativo a la distribución de competencias que la CE ha realizado en esta materia. El fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica en España son responsabilidad del Estado ex artículo 149.1.15 CE. Este mandato se concreta en la actualidad en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo título primero desarrolla las competencias del Estado en materia de coordinación general de la investigación científica e innovación y regula la gobernanza del sistema. La Estrategia Española de la Ciencia y la Tecnología se concibe como el marco de referencia plurianual para alcanzar un conjunto de objetivos generales, compartidos por la totalidad de las Administraciones Públicas con competencias en materia de fomento de la investigación científica y técnica.

Por lo tanto, la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de Ciencia y Tecnología se manifiesta en la posibilidad de desarrollar sus propias políticas, instrumentos y programas de I+D+i, dentro del marco general establecido por el Estado, respetando siempre la gestión y promoción de la ciencia y la tecnología como competencias estatales.

En segundo lugar, debe tenerse también en consideración el papel de la UE en la regulación de la Inteligencia Artificial. Con la aprobación del Reglamento (UE)

2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 300/2008, (UE) nº 167/2013, (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (en adelante Reglamento de Inteligencia Artificial-RIA), se ha propuesto definir un marco jurídico para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en Europa que se centre en el ser humano, sea respetuosa con los valores de la UE y los derechos fundamentales de las personas, y apoye la innovación.

El citado Reglamento de Inteligencia Artificial tiene por objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior en relación con los sistemas de Inteligencia Artificial a partir de la definición de los requisitos que deben cumplir estos sistemas para poder ser introducidos en el mercado, puestos en servicio o ser utilizados en la UE.

Para ello se disponen unas normas comunes a nivel europeo que regulan el desarrollo y el uso de los sistemas de IA con las que garantizar la libre circulación, el mercado interior y la seguridad jurídica. Además, el RIA prohíbe determinadas prácticas de IA que puedan ser contrarias a los valores europeos o a los derechos fundamentales y establece unos requisitos para determinados sistemas de IA, así como unas obligaciones para los proveedores y responsables de despliegue. Por último, el citado Reglamento define una gobernanza tanto a nivel europeo como estatal para el seguimiento, vigilancia y garantía de su cumplimiento.

Por lo tanto, **el ejercicio de las competencias autonómicas en esta materia habrá de entenderse limitado no solo por el respeto a las competencias estatales en esta materia, sino también por el respeto a la normativa europea existente sobre la misma**".

Teniendo en cuenta tales consideraciones en relación con el borrador que ahora nos ocupa, lamentablemente hemos de señalar la existencia de notables diferencias entre uno y otro en cuanto tanto en cuanto se refiera a aspectos formales, tales como la claridad expositiva de su redacción y el orden de su estructura, como en aspectos de fondo relacionados con su alcance y contenido. Así, mientras el objeto de aquél aparecía claramente delimitado en su cláusula segunda, no sucede lo mismo con el texto del presente borrador donde su alcance o contenido aparece disperso a lo largo de distintos puntos tales como: objetivos y finalidades, ámbito de cooperación, y base legal para compartir información. En concreto, el punto de objetivos y finalidades dispone que:

"2. Este memorando de entendimiento es una declaración de intenciones, que no da lugar a obligaciones legalmente vinculantes por parte ni de la APDCAT ni de la GRA. Los firmantes confirman que nada de este memorando de entendimiento debe interpretarse como la imposición a las partes de un requisito de cooperar entre ellas. En particular, no existe ninguna obligación de cooperar en circunstancias que

infrinjan sus responsabilidades legales. Este memorando de entendimiento no modifica ni sustituye ninguna ley o requisito reglamentario vigente o que se aplique en Cataluña y/o Gibraltar, respectivamente. Este memorando de entendimiento no afecta a ningún acuerdo en virtud de otros memorandos de entendimiento, ni está sometido al derecho internacional de los firmantes.

3. Los firmantes reconocen que tienen funciones y deberes similares para la protección de datos personales en sus respectivas jurisdicciones.

4. Los firmantes reconocen que sólo pueden proporcionar información en virtud de este memorando de entendimiento si lo permiten o no lo impiden las leyes, reglamentos y/o requisitos aplicables. Si bien este memorando establece el marco legal para intercambiar información, corresponde a cada parte determinar por sí misma si cualquier divulgación propuesta se ajusta a la legislación que le es de aplicación.

5. Los firmantes han determinado que no intercambian datos personales suficientes para justificar la suscripción de un acuerdo de compartición de datos separado. Sin embargo, esto se mantendrá bajo revisión”.

Añadiendo luego el punto de base legal para compartir información, referencia al posible intercambio entre las autoridades firmantes de la información recibida de fuentes diversas, incluidos datos personales.

Las expresiones subrayadas ofrecen dudas a este Servicio Jurídico acerca de su cabida dentro de un Memorandum de Entendimiento, dado que si por su propia definición no entraña derechos ni obligaciones para las partes difícilmente podría llegar a establecer el “*marco legal para intercambiar información*”.

Del mismo modo, a diferencia del MOU anterior donde se establecía un plazo de duración claramente determinado de 4 años con posible prórroga de otro período de 4 años, en coherencia con el plazo legalmente previsto para los Convenios de colaboración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en esta ocasión el punto de inicio y finalización se limita a establecer que empezará a aplicarse una vez lo hayan firmado ambas partes, y que continuará en aplicación hasta que cualquiera de las partes lo rescinda mediante un preaviso por escrito de 30 días a la otra. Esta indeterminación sobre su plazo de duración se considera contraria a la *voluntas legislatoris* tendente a establecer seguridad y certeza sobre la duración de los acuerdos que lleguen a firmarse por la Administración Pública, por lo que se recomienda seguir la versión contenida en el texto del Memorandum de anterior referencia.

De igual modo, el art. 48 de la Ley de Tratados Internacionales requiere que una vez firmado un acuerdo internacional no normativo se remita copia de este al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para su inscripción en el registro administrativo de dichos acuerdos, lo que habría que hacer igualmente con este Memorando, dado que en el borrador examinado únicamente se contempla la referencia en el punto de Publicación a la posibilidad de poner a disposición de cualquiera de los firmantes una copia del mismo.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta tanto la delimitación competencial de las Autoridades de Protección de Datos previstas en los artículos 57 a 59 de la LOPDGDD, como que de acuerdo con el ut supra citado artículo 45 corresponde a la Autoridad Catalana de Protección de Datos a través de su Servicio Jurídico justificar la naturaleza y procedimiento de este MOU, así como que el mismo se realiza dentro del estricto ámbito competencial que le corresponde, se advierte la necesidad de contar con dicho informe en este expediente a fin de poder emitir de manera ajustada a Derecho la consulta que se solicita.